

41.<sup>a</sup> SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 4 DE 1888

Presidencia del doctor PELLEGRINI

**Ministro presente:** de justicia, culto e instrucción pública.

**Senadores presentes:** Baltoré, Barros, Cambaceres, Dávila, de la Silva, del Valle, Derqui, Febre, Funes, Gil, Mendoza, Navarro, Nogués, Oliva, Ortega, Paz, Pérez, Pizarro, Rodríguez (C. J.), Ruiz (H.), Ruiz (M.), Tello y Zapata.

**Senadores ausentes, con licencia:** Moyano, Rocha y Rodríguez (M. F.).

**Senadores ausentes, con aviso:** Baibiene, Gollán y Ortiz.

SUMARIO

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Incidencia acerca de una solicitud del obispo de Córdoba.
- 3.—Continúa la discusión del proyecto de ley reformativo de nuestra legislación sobre el matrimonio.

—En Buenos Aires, a cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Baibiene, Gollán y Ortiz, con aviso; y con licencia, Moyano, Rocha y Rodríguez (M. F.).

Leída y aprobada el acta de la anterior de 1.<sup>o</sup> del corriente (40.<sup>a</sup> ordinaria), se da cuenta de los siguientes asuntos entrados:

1

Comunicaciones oficiales

El Poder Ejecutivo acusa recibo de la ley número 2.308. Al archivo.

—El mismo envía un mensaje y proyecto de ley abriendo un crédito suplementario de pesos 39.569,25 al Departamento de Relaciones Exteriores. A la Comisión de Hacienda.

Peticiones particulares

Humberto Della Casa y Compañía hacen una exposición sobre la solicitud de privilegio para la fabricación de dinamita. A la Comisión del Interior.

—Silveria Matorra de Lecube solicita pensión graciable. A la Comisión de Peticiones.

2

El obispo de Córdoba en unión con el clero pide no se sancione el proyecto de matrimonio civil. Se reserva en Secretaría.

**Sr. Pizarro.** — Pido que se dé lectura de esta solicitud.

**Sr. Cambaceres.** — Deseo saber si la solicitud del obispo de Córdoba viene con el sello correspondiente.

**Sr. Presidente.** — No, señor senador; viene en papel simple.

**Sr. Cambaceres.** — Entiendo que la Secretaría no ha debido recibirla.

**Sr. Pizarro.** — Entiendo que para las comunicaciones oficiales como son las de un prelado argentino, que no es un simple particular, que es una persona constituida en dignidad y con carácter público, no rige la ley de sellos, cuando se dirige en representación sobre asuntos de interés público y social, y no haciendo gestiones de carácter privado.

Yo pido que la Cámara, en todo caso, se pronuncie sobre este punto, aun cuando no es pertinente porque entraría a pronunciarse como

Septiembre 4 de 1888

CAMARA DE SENADORES

43ª Reunión. 41ª Sesión ordinaria

juez sobre la aplicación de sus leyes; pero tratándose de recibir o no recibir esta solicitud, puede venir bajo otra forma la resolución de la Cámara.

**Sr. Cambaceres.** — Es que la solicitud está firmada por un número crecido de personas ajenas al clero.

**Sr. Pizarro.** — Es el obispo de Córdoba con una representación oficial, no en su carácter privado, que hace esta petición.

**Sr. Presidente.** — El Senado resolverá por una votación si se da lectura de la solicitud del obispo de Córdoba.

**Sr. Pizarro.** — No leerla sería hacerle un desaire que indudablemente no merece.

**Sr. del Valle.** — Pido la palabra.

El caso es dudoso a primera vista; pero me parece que en el ánimo del Senado debe pesar siempre una consideración para la resolución de este punto, y es que se trata del ejercicio de uno de los derechos primordiales de todos los habitantes de la República Argentina, derecho garantizado por la Constitución sin limitación alguna; se trata del ejercicio del derecho de petición, y si hay duda, diremos lo que los jueces americanos, que esa duda se resuelve en el sentido de la libertad.

Por lo tanto, siendo como soy adversario a las ideas a que sin duda alguna responde esta solicitud, he de votar porque el Senado tome de ella conocimiento, porque se le dé lectura, no obstante la omisión en que pueda haberse incurrido, al no presentarla con el sello correspondiente.

**Sr. Cambaceres.** — Debo hacer presente a la Cámara lo siguiente: que la petición firmada por el señor arzobispo de Buenos Aires y clero de la Capital Federal, ha venido con el sello correspondiente.

**Sr. Funes.** — Señor presidente: todo habitante de la Confederación tiene derecho de expresar sus ideas, y el Congreso se felicita mucho de recibir luces de cualquier parte que vengan.

Esta es una pequeña dificultad de forma. Lo que se podría hacer, en este caso, es exigir que se reponga el sello, y, si se quiere, yo tendré mucho gusto en pagarlo.

**Sr. Cambaceres.** — Deseo saber lo que dice la ley de sellos, porque entiendo que la Secretaría no ha podido recibir esta petición no viniendo con el sello correspondiente.

**Sr. Presidente.** — La Secretaría ha recibido la petición porque no podía resolver el caso por sí.

**Sr. Rodríguez (C. J.).** — Pido la palabra. Ni el Senado, ni el Congreso, señor presi-

dente, sostienen relaciones oficiales sino con el presidente de la República.

El derecho de petición, estoy de acuerdo con el señor senador por Buenos Aires, en que debe ser amplísimo, pero ese derecho no se estorba aun cuando la ley lo haya reglamentado. Deben, pues, venir ante las autoridades en la forma que la ley lo establece, y no se restringe el derecho de petición porque la ley haya designado la clase de papel en la cual deba ejercitarse este derecho.

Lo que primero debe tenerse en cuenta es si el Senado puede mantener relaciones oficiales con el obispo, para eximirle de usar el papel sellado que corresponde por la ley a toda petición que se haga ante el Congreso o ante alguna de las Cámaras.

**Sr. Pizarro.** — He indicado, señor presidente, la conveniencia de resolver esto por una votación, y desearía que al fijar la votación, se hiciera en estos términos: si se da o no lectura de este documento, con cargo de reposición del sello.

El señor senador por Córdoba se compromete a tomar esto a su cargo, y yo también.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar si se da lectura de esta petición, con cargo de reposición del sello.

—Se vota y resulta afirmativa.

3

—Se lee:

Córdoba, Agosto 31 de 1888.

*Al Honorable Senado de la Nación.*

El obispo de Córdoba, en unión con el clero secular y regular de esta ciudad, considerando:

1º — Que según la doctrina católica el matrimonio es un acto sagrado por su naturaleza, y uno de los siete sacramentos de la ley evangélica, instituido por Nuestro Señor Jesucristo, y que entre cristianos es indivisible e inseparable el contrato conyugal del sacramento;

2º — Que el matrimonio está exclusivamente sujeto a la autoridad de la Iglesia, y que el poder civil carece de toda facultad para legislar sobre el mismo vínculo nupcial, si bien puede hacerlo en cuanto a los efectos civiles;

3º — Que las leyes eclesiásticas sobre el matrimonio, aceptadas por el Código Civil argentino, satisfacen plenamente todas las necesidades de nuestra sociedad; y

4º — Que el proyecto de ley de matrimonio, hoy en discusión ante esa Honorable Cámara,

es diametralmente opuesto a la doctrina católica y a los sagrados cánones, y que su sanción perturbaría hondamente las conciencias y produciría otros resultados funestos a la sociedad argentina.

A vuestra honorabilidad con todos los respetos debidos al primer Cuerpo Legislativo de la Nación, encarecidamente suplican se sirva no prestar su sanción al referido proyecto para bien de la religión y de la patria.

*Fray Reginaldo,*  
Obispo de Córdoba.

(Siguen 32 firmas).

**Sr. Presidente.** — Continúa la discusión de la orden del día.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Pizarro.** — Al terminar la sesión pasada, me ocupaba, señor presidente, de considerar los motivos determinantes de la reforma que se proyecta a la ley del matrimonio en la República.

El Poder Ejecutivo en su mensaje y el señor miembro informante de la Comisión en su exposición de motivos, han señalado a esta reforma el carácter de una necesidad social.

El Poder Ejecutivo dice que ella es «reclamada por altas necesidades sociales que se sienten cada día con mayor viveza», y su mensaje comienza indicando de dónde provienen estas necesidades. El Poder Ejecutivo las atribuye a modificaciones producidas en nuestra sociabilidad por el «creciente aumento de la inmigración europea que ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar nuestra legislación sobre el matrimonio», por la heterogeneidad que ella da a nuestra población y la diversificación que produce en la fe religiosa de la Nación.

Para rebatir esta idea, apunté antes de ahora algunas observaciones de carácter general, diciendo: la inmigración europea es religiosa, es cristiana, y en gran parte católica, y nuestras leyes vigentes sobre el matrimonio dan todos los medios y facilidades deseables a las diversas sectas cristianas para verificar el matrimonio, sin inconveniente alguno, en los altares de su propio culto. De consiguiente no puede este proyecto responder a una necesidad social producida por la diversidad de creencias religiosas de la inmigración europea considerada bajo su aspecto general y colectivo.

Ahora yo diré, señor presidente, que aunque la observación del Poder Ejecutivo, y el pretexto que ella señala a la reforma, fueran en sí mismas ciertas de toda verdad, no alcanza-

rían a motivar el proyecto, pues no podría decirse que la circunstancia indicada constituye una verdadera necesidad social, dado que la inmigración europea en nuestra población no constituye la colectividad de ésta, no forma por sí misma nuestra sociedad, y apenas si hace parte todavía muy diminuta de ella, con relación a la población nacional que es homogénea casi en la totalidad de las provincias argentinas.

De todos modos, resultaría ser una ley incorrecta la que se proyecta, pues no responde al concepto de una verdadera necesidad social, como el Poder Ejecutivo expresa y lo reproduce la mayoría de la Comisión en su informe. El proyecto respondería sólo al interés exclusivo de cierta y determinada clase social, lo que no basta para determinar una reforma en la legislación general del país, desatendiendo las exigencias del mayor número y de la población nacional, a menos de querer subordinar las exigencias de la colectividad en su conjunto, y considerada la sociedad en abstracto, a las exigencias o necesidades, por otra parte inexactas, de una fracción social; dado que se atribuya toda la importancia que se quiere atribuir a la circunstancia que se indica como ocasión o motivo de este proyecto, lo que es demasiado conceder por mi parte. Ni aun en tal concepto, digo, podría sostenerse este proyecto como motivado por razones de necesidad social, y menos por razones de «altas necesidades sociales vivamente reclamadas», según se expresa el Poder Ejecutivo en su mensaje.

Mucho menos puede sostenerse este falso supuesto, en que estriban las observaciones de la Comisión y del Poder Ejecutivo, cuando, como queda expresado, la inmigración europea es casi en su totalidad religiosa y pertenece, sino a la comunión católica dominante en el país — y una gran parte de la población extranjera pertenece a esta misma —, por lo menos pertenece a la comunión cristiana, lo cual deja completamente inmotivada la reforma que se proyecta.

Repito que para todas las diversas sectas disidentes, la legislación actual del país provee de una manera eficazísima, dando facilidades a la celebración del matrimonio, con amplias garantías a la conciencia religiosa de sus miembros.

Esta pretendida necesidad social, considerada desde otro punto de vista, no existe, señor presidente, en concepto de los poderes públicos de la Nación.

Hace muy poco tiempo, señor presidente, que la legislación civil del país ha sido sometida a una revisión escrupulosa. No hace cuatro años que ella ha sido estudiada por el Congreso y,

en parte, modificada; y sería de extrañar que, tratándose de tan altas necesidades sociales y tan vivamente sentidas, como las que supone el Poder Ejecutivo y la Comisión, no hubiese el Congreso, en aquella oportunidad, tomado en cuenta estas necesidades, para introducir en la legislación civil las reformas que ellas demandasen.

Se me dirá que nuestra sociabilidad ha cambiado desde entonces. Yo digo, señor presidente, que una nación no cambia en cuatro años el carácter de su sociabilidad; yo digo, que en tan corto tiempo no se transforma y modifica el carácter religioso de una nación.

Pero, prescindiendo de estas observaciones generales y viniendo al motivo fundamental del proyecto, yo quiero buscar dentro del pensamiento mismo del Poder Ejecutivo y de la Comisión, cuáles son los síntomas que revelan esta supuesta necesidad social.

El Poder Ejecutivo y la Comisión han señalado dos. Ellos dicen: en la población extranjera hay algunos que o no tienen sacerdotes de su culto en el país, o no profesan culto alguno, adorando a Dios únicamente como autor de lo creado, sin pertenecer a ninguna religión positiva.

Ya se ve, entonces, cuánto baja en el concepto social, al punto de vista de la población extranjera misma, y mucho más al punto de vista verdaderamente social, o de la colectividad de la población en general, el pretexto que se señala a la reforma, como reclamada por una alta necesidad social.

Ni siquiera la inmigración europea, como colectividad distinta de la población nacional, puede ser invocada para establecer esta pretendida necesidad social, y justificar de algún modo la reforma promovida en interés exclusivamente suyo, según lo que para motivarla se expresa por el Poder Ejecutivo y por la Comisión en mayoría. La necesidad social queda en todo caso reducida a una necesidad de carácter puramente individual o particular.

En las provincias litorales, donde la población extranjera abunda, relativamente al resto de la República, en que es escasísima, y su población completamente homogénea, cada una de las diversas sectas disidentes tiene sus templos, sus pastores, sus ministros. Esto lo vemos en Buenos Aires y Santa Fe a cada paso que damos, y lo mismo sucede en el resto del litoral. Las diversas comuniones cristianas tienen en todo él sus templos, sus pastores y ministros protestantes para el servicio religioso de las sectas disidentes, y no es con relación a ellos que

se puede establecer esta pretendida necesidad social del matrimonio civil.

Y desde luego, tratándose simplemente de alguno que otro inmigrante que no tenga en el país sacerdotes de su culto, contesto de una manera perentoria a la observación, en la forma en que lo hice en la sesión anterior: el que no tiene sacerdote de su culto, procúreselo, cóstelo. Esto no constituye una dificultad «de derecho», que deba remediarse por una «reforma legislativa», ni importa en sí misma una «necesidad social». Es una necesidad de carácter individual y privado, que procede de un «hecho» que no remedia el proyecto.

Esto mismo quiere decir que tales individuos se encuentran en tan reducido número que no alcanzan a formar iglesia y sostener su culto.

Elimino, pues, todo esto del motivo que se indica, para establecer esta pretendida, supuesta y falsa necesidad social, que se quiere hacer servir de base a la reforma; y entonces esta reforma que se presenta como reclamada por altas necesidades sociales vivamente sentidas, queda reducida a esto, que el Honorable Senado no va a creer: queda reducida a que hay algunos que creen que no deben someterse al imperio de nuestras leyes en la celebración del matrimonio, y que es necesario reformarlas porque «algunos creen que no deben casarse así», — porque algunos creen que no deben casarse como mandan las leyes del país en que quieren casarse — que no deben hacerlo como mandan nuestras leyes vigentes, las que deben reformarse en su exclusivo interés.

Yo debo declarar, señor presidente, que como argentino me he sentido tristemente impresionado cuando he visto al Poder Ejecutivo acometer esta reforma y producir en el país la agitación social en que se encuentra en estos momentos, pretendiendo someter nuestra soberanía nacional a una exigencia tan caprichosa, tan inapreciable y en todo sentido tan insignificante como ésta.

«Aquellos que no pueden casarse con arreglo a las disposiciones del Código Civil por no haber en el país sacerdotes de su culto, y «los que creen que no deben casarse así», se verán en la dura alternativa de «traicionar su conciencia», o de privarse del derecho de formar un hogar amparado por las leyes», dice el Poder Ejecutivo en su mensaje.

No queda entonces, como motivo de la reforma, después de lo que dejo expuesto, sino este último concepto del Poder Ejecutivo para establecer la «necesidad social» a que ella responde.

Como se ve, la necesidad social de que el Poder Ejecutivo y la Comisión nos hablan, desaparece ante una exigencia de carácter individual, de carácter microscópico, si me es permitida la frase, y tan desautorizada como ésta.

Pero las leyes no se dictan por tales motivos y con carácter tan personal, señor presidente. Las leyes de la Nación deben dictarse por motivos de interés general, tomando la sociedad en su conjunto y los individuos por abstracción. La sociedad, no individuos determinados, es lo que ellas deben consultar, si no se quiere, en este caso, crear y constituir una ley de privilegio en favor de ellos, y en contra de la sociedad en general.

¿De manera que, porque hay «algunos que creen» que el matrimonio no debe tener carácter religioso, todos los que «creen» que este es el solo y verdadero carácter social del matrimonio, y la fórmula racional de su celebración, tendrán que ver reformarse las leyes, y la sociedad entera será así violentada en su conciencia, para servir la inconsciencia de aquéllos?

¿De suerte que, porque algunos creen que no deben casarse así, todos los que creen que sólo así se casan, nada representan socialmente, y aun cuando esto está sancionado por nuestras leyes, la legislación, las costumbres, la sociedad, el país todo tiene que cambiar, y subvertirse todo, en beneficio de aquel limitado número de los que no creen?

Esto no me parece racional, señor presidente: esto peca contra todos los principios de buena legislación, y el concepto que la Comisión y el Poder Ejecutivo pretenden fundar al dar carácter social a semejante necesidad, peca contra las leyes de la lógica.

De que haya algunos individuos que puedan no encontrarse cómodos con nuestras leyes sobre el matrimonio, según ellos lo entienden y «creen que debe celebrarse», no se sigue que nuestra sociabilidad haya cambiado, ni que semejante necesidad exista respecto a la población en general, y menos respecto a la población nacional, que es para quien en primer término se dictan las leyes, aunque éstas abarcan en segundo término a los extranjeros, por lo mismo que obligan indistintamente a todos, y deben todos ser iguales ante la ley, quedando así sujetos y bajo el amparo y protección de ellas todos los que quieren venir a vivir entre nosotros.

Yo diría que el argumento que hace el Poder Ejecutivo en este sentido peca contra el principio de la soberanía nacional, como peca contra el principio de la lógica de que de la parte al todo no hay consecuencia. De que haya en tal

caso una necesidad individual, o particular, no se sigue que esta necesidad sea social.

Así este proyecto se presenta contradictorio en todo, y pugna con las leyes civiles y políticas de la Nación, como con las leyes de la lógica; pugna con los principios fundamentales de la República como pugna con la razón misma.

Eliminando, señor presidente, de los elementos que componen esta ficticia necesidad social, el que se refiere a la falta de sacerdotes de algún culto disidente, para los pocos extranjeros que pudieran encontrarse en este caso, y concretada la cuestión a la incredulidad de algunos otros; para que en este sentido pudiera decirse que nuestra sociabilidad había cambiado en tan corto tiempo como el que sería preciso señalar a la evolución social, menester fuera establecer quiénes, nuestra sociedad es hoy tan incrédula como aquellos a quienes aluden el Poder Ejecutivo en su mensaje y el señor miembro de la Comisión en su informe.

Yo preguntaría así al Poder Ejecutivo, si éste es realmente el carácter de nuestra sociedad en la época transecurrida desde la reforma del Código Civil hasta hoy: si en esta época la sociedad argentina ha dejado de ser tan creyente, tan cristiana, tan católica como lo era antes de ella.

Yo le diría al señor ministro: hay una medida precisa para determinar cuál es al respecto el estado de nuestra sociabilidad: esa medida es la ley de presupuesto. ¿Qué dicen sus cifras?

Cada día aumentan las partidas destinadas al sostenimiento del culto: es necesario construir nuevos templos, costear seminarios, subvencionar capillas, fundar nuevos obispados, crear nuevas diócesis, etcétera, y todo esto demuestra que la incredulidad y la falta de religión no es el carácter de nuestra sociabilidad.

Si todo esto es necesario, y si el Congreso hace pocos meses, no más, reconociendo en este sentido las necesidades crecientes de la población, acaba de dictar leyes para la creación de nuevas diócesis y fundación de nuevos obispados: si ha erogado y está constantemente erogando cuatiosas sumas para la fundación de templos y capillas en la República, ¿cómo hablar de la incredulidad nacional sin decir que todos estos gastos legislativos carecen de objeto y sentido práctico, son medidas completamente desautorizadas, que no responden a verdaderas necesidades y exigencias sociales?

Luego, es falso que el carácter eminentemente cristiano y católico de la Nación haya cambiado, como se pretende.

En este caso, señor presidente, hay una mar-

cada inconsecuencia en la política del Poder Ejecutivo y del Congreso al sancionar este proyecto.

La inconsecuencia es evidente, señor presidente, desde que por un lado se trata de eliminar de la vida social la influencia católica eliminándola de la familia y de la sociedad, en las costumbres públicas y en la moral privada, al eliminarla de la legislación del matrimonio; y por otro se trata de fomentarla en la sociedad y en la familia por los medios que acabo de indicar.

¿Cuál es, entonces, la política del Poder Ejecutivo? ¿Cuándo es que verdaderamente responde a la política de la Constitución? ¿Es este proyecto el que responde al texto y al espíritu de la Constitución nacional, o son aquellas otras leyes las que verdaderamente responden a su espíritu y a su texto?

Una de estas dos políticas tiene que estar en contra de la Constitución: o las leyes que fomentan el culto católico, y que tratan de desarrollar esta influencia en el país, invisten verdadero carácter constitucional, y demuestran que el de la Nación es eminentemente católico, y que aquellas leyes sirven eficazmente su sociabilidad y su carácter religioso, no menos que los propósitos y altos fines morales de la Constitución al desarrollar la influencia católica en nuestras poblaciones; o se tiene forzosamente que declarar la inconstitucionalidad del proyecto en discusión, como contrario a los principios fundamentales de la Constitución, y a sus altos fines morales, políticos y sociales.

Pero, señor presidente, hay cosas que no se pueden discutir, esta es una de ellas. ¿Quién ignora que nuestra Constitución es una ley espiritualista y católica, y que la República Argentina es una nación católica? Esta es una cuestión de geografía que un niño de escuela sabría discernir: son cosas que no se pueden discutir, son cosas de simple buen sentido. ¿Cuál es la relación en que está la religión católica con las demás sectas disidentes en la República?

No quiero referirme ya a la Constitución: no quiero averiguar nada de sus prescripciones y disposiciones bien explícitas. Pero digo un extranjero que por primera vez pisase nuestras playas, pasease nuestros templos, podría desde el primer momento decirlo. A cuatro pasos del Congreso vería levantarse nuestra Iglesia Metropolitana: sabría que hace pocos días no más, de quince a veinte mil personas llenaban esta plaza en una fiesta solemne del culto católico: vería nuestros templos frecuentados

diariamente y llenos de gente, asistiendo a las ceremonias del culto católico.

Vería también los numerosos templos protestantes concurridos y repletos en las fiestas de los cultos disidentes: y comenzando por decir que esta es una nación altamente cristiana, concluiría por decir que es una nación eminentemente católica.

En ningún caso se puede negar el carácter cristiano de nuestra civilización, y esto me bastaría para estar en contra de este proyecto de ley.

Yo no impugno, señor presidente, este proyecto sólo desde el punto de vista católico, sino también desde el punto de vista cristiano, en general, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de las libertades públicas, en general.

El Poder Ejecutivo y la Comisión nos presentan este proyecto como una ley de libertad, cuando él deja encadenada la libertad civil y religiosa en la barra del tribunal de la alcaldía ante quien es menester ir a pedir permiso para casarse y contraer matrimonio legítimo según la propia conciencia religiosa y moral de los contrayentes; arrebatando así al pueblo, y a las diversas comunidades religiosas el derecho y libertad de que actualmente gozan por la Constitución y leyes vigentes; quedando así centralizada, confiscada, y dependiente del poder oficial, el derecho y las libertades públicas que gozan actualmente los individuos de todas las creencias, y las diversas comuniones religiosas en que la población general de la Nación se encuentra dividida.

Me parece que tratado desde este punto de vista el proyecto, resulta él evidentemente contrario, no a una determinada comunión religiosa, sino a todas ellas; siendo con relación a cada una más o menos violenta, según el número de sus individuos, y su mayor o menor importancia en la República.

He dicho, señor presidente, que el carácter de esta ley es tan antisocial y contradictorio como los motivos mismos que la fundan, y esto se observa y se demuestra en todo.

Creo haber demostrado cómo el Poder Ejecutivo, partiendo del falso supuesto de que una necesidad social exige la reforma que se proyecta, viene a concluir con que esta necesidad social no es tal necesidad social, sino una mera necesidad privada.

Por esto el proyecto trata de convertir la institución social en mera institución privada.

Pues bien: es de observar, ahora, que esta ley, en vez de responder a una necesidad social,

tiene por único objeto promover una reforma social.

Este es su objetivo. Es esta una ley premeditada y concebida con espíritu doctrinario de reforma social, con espíritu socialista y revolucionario, no sólo contrario al espíritu sino al texto mismo de la Constitución nacional. Esta ley está calculada, precisamente, para producir resultados contrarios a los que la Constitución ha previsto y pretende en su sabiduría y alta política obtener y alcanzar en nuestra sociabilidad.

Por lo mismo que esta ley, señor presidente, tiene por objeto reformar la constitución de la sociedad doméstica, no a otra cosa tiende que a la reforma de la constitución social. Por lo mismo que comienza por eliminar la influencia del principio religioso en la constitución de la familia, comienza por eliminar la influencia de este principio en la constitución de la sociedad misma.

Por lo mismo que elimina la idea y la noción religiosa en el acto constitutivo de la sociedad doméstica, punto de partida en la sociedad civil, elimina la noción y la idea de Dios en el acto constitutivo de las sociedades humanas.

El principio religioso deja, así, de ser un principio constitutivo de la sociabilidad humana, y ésta pasa a ser un mero contrato, una mera convención, un acto de pura voluntad, un cálculo del interés individual; no el resultado de nuestro ser racional, de nuestra naturaleza sociable, de nuestro ser espiritual.

Estamos, pues, señor presidente, en el terreno del «pacto social».

Estamos en el pretendido «estado de la naturaleza».

Estamos en el terreno de la filosofía naturalista, positivista, socialista, con Rousseau, Darwin, Comte, Moleschott, etcétera.

Dado este antecedente, para poder atribuir carácter constitucional al proyecto en discusión, sería menester establecer que nuestra Constitución parta de estos supuestos filosóficos, y socialistas, cuando, precisamente, ella parte de principios contrarios y diametralmente opuestos.

De aquí procede que esta ley, destinada a subvertir los principios en que descansa la legislación civil del matrimonio, calcada sobre los principios religiosos del cristianismo, está destinada a subvertir los principios políticos de la Constitución, que consagrando el hecho y el derecho de nuestra sociabilidad y civilización cristianas, consagra el principio fundamental de la libertad humana, y la soberanía de la razón pública, o de la opinión y de la

voluntad nacional en el gobierno de la República.

Supuesto que es necesario eliminar del régimen civil del matrimonio la influencia del principio religioso, en consonancia al espíritu y tendencias de una filosofía puramente materialista, en religión, en moral, en legislación, en jurisprudencia, en política y demás ramos de la ciencia social, siguiendo el espíritu y tendencias de una nueva civilización en todas las manifestaciones de la vida humana; forzoso será concluir, para mantener la lógica en la legislación, por la reforma de ésta en todos sus ramos: civil, comercial, penal, público y privado; y por consiguiente en el derecho constitucional vigente, abordando así la reforma de la familia, de la sociedad, de la moral, de las costumbres, de la civilización cristiana, en fin.

Yo creo, señor presidente, que la Comisión y el Poder Ejecutivo no han meditado suficientemente este proyecto, ni se han dado cuenta de la trascendencia del acto, y de la naturaleza de esta institución.

Yo creo que no se han dado suficientemente cuenta de la íntima relación que existe entre las leyes civiles y las leyes políticas de una nación: entre su sociabilidad y su constitución política; entre su constitución política y la legislación general que debe desarrollar con arreglo a ésta y al principio informativo de su civilización.

No se puede, sin hacer extorsión a la Constitución, y sin hacer extorsión a nuestra sociabilidad y civilización cristianas, establecer una teoría o principio contrario a ellas, que deba ser desarrollado en la legislación y en el derecho privado de la Nación. Esta legislación debe ser conforme a la constitución política de la Nación, del mismo modo que ésta debe ser conforme a la compleción social de la Nación misma.

Los pueblos, señor presidente, no se dan las constituciones políticas que quieren. Ellos las reciben de su estado social, de sus tradiciones, de su historia, del suelo mismo en que les cupo nacer, y según el principio informativo de su civilización al constituirse en cuerpo de nación. ¿Cuál es este principio entre nosotros? ¡El cristianismo! Lo es desde las leyes de Indias, en el gobierno colonial; desde el Congreso célebre de Tucumán que declaró nuestra Independencia, «invocando al Eterno que preside el universo», reconociendo y fundando así la filosofía espiritualista y cristiana de la nación independiente!

Nuestra vida nacional es, pues, espiritualista



y cristiana. Nació de una profesión de fe en Dios, que señala el origen del hombre como emanado de Dios autor de todo lo creado; y este principio fundamental de nuestra existencia social y política, quedó así consagrado como principio informativo de nuestra civilización, para que se desenvolviese en nuestra legislación, con arreglo a esta declaración solemne, con arreglo a la propia historia del país, a sus tradiciones, a su complexión social.

Este es el principio fundamental de toda nuestra legislación. Desde las Leyes de Indias y la solemne declaración de la Independencia por el Congreso de Tucumán, hasta ayer, no más, que se dictó nuestra Constitución nacional, repitiendo que ella es ordenada y establecida «en nombre de Dios», fuente de «toda razón y justicia», rige este principio como principio eterno de nuestra legislación nacional.

¿Con qué criterio han estudiado, pues, el Poder Ejecutivo y la Comisión el preámbulo de la Constitución, a que pretenden referirse para fundar constitucionalmente este proyecto? ¿Qué quiere decir esto que la Constitución consigna en su portada, cuando en ella inscribe el nombre de Dios y al propio tiempo declara que es la ley fundamental de la Nación y que ella «es dada» en nombre de Dios fuente de «toda razón»?

De «toda razón», señor presidente es decir, de toda «verdad», de toda filosofía, de todo discurso, de toda ciencia, de «toda razón», es decir, de «toda ley»!

Dios, entonces, como inspira la Constitución o la ley fundamental del país, debe inspirar toda la legislación que «en consecuencia» de esta ley y de este principio fundamental de la ley fundamental de la Nación, se desarrolle en ella.

La legislación toda de la Nación, su derecho todo, tiene así que ser espiritualista y estar fundado en la filosofía cristiana de la Constitución, no sólo en lo relativo al título del «Matrimonio», del Código Civil, sino en toda la legislación penal, comercial, internacional, política; en todas las leyes y en todos los códigos de la Nación, para que estos códigos y estas leyes sean «consecuencia» de la Constitución y del «primer principio» que ella inscribe en su portada.

La Constitución funda así su escuela social, colocándola en uno de los extremos en que se divide la controversia social que ahora se trae al debate y de que hablé al principio de mi discurso, diciendo que toda ella viene encerrada en estos términos: Dios, el espíritu de Dios, la

«razón» y el alma humana inmortal, espiritual y libre; en contraposición a la materia increada y la «fuerza», simple manifestación de la materia.

La Comisión en su exposición de motivos no ha hecho otra cosa, señor presidente, que reproducir los conceptos fundamentales del mensaje del Poder Ejecutivo. Pertenece a la misma escuela que éste, y desarrolla y funda los mismos principios en su exposición, aunque en ocasiones se exterioriza un poco más, como cuando declara de una manera paladina que uno de sus objetos al sostener este proyecto, es eliminar la influencia de «toda soberanía extranjera» en la Nación, refiriéndose a la «soberanía y autoridad», no por cierto «política», que ninguna tiene en este momento el Romano Pontífice, sino a la soberanía o «autoridad moral» que ejerce, no tampoco sobre el cuerpo, sino sobre el espíritu o sobre las almas.

Voy a ocuparme, señor presidente, de este informe.

«Para considerar este proyecto, dice, la Comisión no ha consultado ninguna ley extranjera: solamente ha tenido en cuenta y se ha inspirado en los preceptos de la Constitución, porque como argentinos, como legisladores, representantes de la soberanía nacional en este Congreso, no reconocemos otra autoridad superior a esa Constitución.»

Este es un modo, señor presidente, de crear un derecho que no tenga precedentes en la historia del mundo, y de constituir una ley cuya jurisprudencia no podría estudiarse en otra parte que en la mente del Poder Ejecutivo y de la Comisión. Esta ha llevado su independencia a tan alto grado, que no quiere saber nada con la experiencia y la ciencia de las demás naciones: nada quiere saber de su legislación, nada quiere saber de su jurisprudencia ni de su derecho.

¿No se trata, al fin, de la independencia y de la soberanía, que es necesario mantener hasta el punto de sacudir y eliminar la soberanía de Dios y de su Pontífice en la tierra? ¿Qué extraño que elimine la de las otras naciones y quiera prescindir de todo conocimiento humano!

¿La ciencia del Poder Ejecutivo y la de la Comisión será la única que baste para iluminarnos en este debate, y para resolver después las innumerables cuestiones a que dé lugar este proyecto, tanto en el orden social como en el orden jurídico?

No habrá que preguntar a ninguna de las escuelas el sentido de esta ley; no habrá que



consultar a ningún abogado, que todos serán ineptos y pequeños. Ellos nada podrán saber porque sólo tienen la ciencia de Europa con su civilización; ellos conocerán el derecho francés, conocerán la filosofía alemana, conocerán todo lo que quieran conocer; pero no conocerán esta nueva filosofía, este nuevo derecho, que sólo en dos o tres cabezas privilegiadas está encerrado en la República; en la de los hombres del Poder Ejecutivo y de la mayoría de la Comisión de Legislación del Senado. (*Aplausos*).

**Sr. Presidente.** — Con otra manifestación como ésta será desalojada la barra.

**Sr. Pizarro.** — La Comisión en su exposición de motivos nos da a conocer el estudio que ha hecho del proyecto en estas palabras de su miembro informante:

«Decía, señor presidente, que para el estudio de esta ley, la Comisión se había propuesto dos cuestiones. Se ha preguntado en primer lugar si el matrimonio como institución social puede y debe ser legislado y reglamentado por la autoridad civil, es decir, por la autoridad soberana del Estado; se ha preguntado en segundo lugar, si es conveniente y oportuno quitar a la «Iglesia Católica» la intervención que el Estado le confiere en estos asuntos que versan sobre el matrimonio, etcétera.

«Sobre la primera cuestión, señor presidente, la Comisión cree que no puede discutirse ni ponerse en duda el derecho del gobierno para legislar y reglamentar esta institución que es esencialmente social.»

La Comisión, para resolver esta primera cuestión, entra a hacernos una larga historia desde la aparición del hombre en el paraíso terrenal, para demostrarnos que en todas las épocas y en todo el mundo se ha legislado sobre el matrimonio.

Pero, ¿por qué la Comisión que en un párrafo anterior de su informe ha rechazado toda enseñanza, todo legado de la humanidad en este asunto, viene ahora pretendiendo invocar los precedentes legislativos de las demás naciones para establecer el derecho que nadie le discute, de legislar sobre el matrimonio conforme lo han hecho en todo tiempo las otras naciones?

Es que en esto, como en todo lo demás, debe manifestarse el principio de contradicción que domina todo el proyecto! No se dará un paso en él, ni en su filosofía, ni en el desenvolvimiento de las ideas que entraña, ni en el de los motivos en que pretende fundarse, ni en el de las razones con que se quiera justificarlo; no se dará un solo paso sin tropezar con una con-

tradicción y sin que las palabras mismas se contradigan a renglón seguido: lo mismo si se trata del Poder Ejecutivo que si se trata de la Comisión y de todos cuantos quieran sostenerlo!

Pero, aparte de estas observaciones, señor presidente, ¿por qué la Comisión y por qué el Poder Ejecutivo que comienzan por establecer y declarar repetidas veces — y no podía ser de otro modo — que el matrimonio es una «institución social», por qué partiendo de este antecedente que debe ser el punto de mira en la legislación civil del matrimonio; por qué estableciendo premisa semejante que debe conducir al legislador a conservar y mantener este carácter «social» de la institución; por qué partiendo de este antecedente que debe ser el punto de mira en la legislación civil del matrimonio es un «mero contrato privado», una institución exclusiva del «derecho privado» de las naciones, una mera «institución civil»? ¿Por qué después de aquel antecedente, deducen que el matrimonio «no es» institución social?

O no nos entendemos en el sentido mismo de las palabras, señor presidente, o no sabemos lo que importa una «institución social», y la diferencia que hay entre ésta y una mera «institución jurídica».

La Comisión y el Poder Ejecutivo se ponen, pues, en contradicción consigo mismos — contradicción chocante y evidente — cuando estableciendo que el matrimonio es una «institución social» concluyen por declarar que es simplemente una «institución civil» una mera institución del derecho privado de las naciones, un mero «contrato privado» o institución de la voluntad privada y del «derecho individual».

Y al llegar a esta conclusión, despojando al matrimonio, como «institución social», de su carácter religioso y moral que tiene en sociedad, llegan necesariamente a esta otra: que el principio informativo de él, no siendo el de la moral social o de las «costumbres públicas», es, necesariamente, el de la fuerza, estableciendo así el principio de la «fuerza», como principio informativo y reaccionario de nuestra sociabilidad misma.

Y yo digo, señor presidente, que en todo esto hay grande error de parte del Poder Ejecutivo y de la Comisión, que confunden nuestra sociabilidad con nuestra política. Ellos confunden nuestra actualidad social con nuestra actualidad política. Este proyecto responde de una manera evidente a nuestra actualidad política, pero no corresponde en manera alguna a nuestra actualidad social.

Puede decirse con verdad que la política actual es materialista en los hechos y tiende al desenvolvimiento de las teorías propias de la escuela a que pertenece, y de las opiniones que profesa en orden a sus inclinaciones y tendencias, en conformidad a sus manifestaciones en la vida pública.

Yo no negaré ni discutiré nada de esto; pero lo que sí niego y discuto es el principio que constitucionalmente se pretende establecer como elemento informativo de nuestra sociabilidad, y que precisamente, constituye la antítesis que se nota entre este proyecto y la Constitución, entre el gobierno y la sociedad. Si aquél es materialista, ésta es espiritualista, y ama la «libertad» que es el principio contrario de la «fuerza».

Hay, pues, en todo este proyecto, desde cualquier punto de vista que se le considere, el natural antagonismo de las dos escuelas.

La Comisión, señor presidente, en su larga excursión histórica desde los tiempos paradisiacos, ha venido a descubrir que el matrimoniosacramento es una invención del siglo IV de la era cristiana. Yo no sé si el señor miembro informante de la Comisión, al declarar en su informe que no sabía teología, ha incluido en esta ciencia también la historia eclesiástica; porque entonces no me extrañaría que no se haya dado cuenta de que el matrimoniosacramento fué instituido por Nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná, y de que San Pablo nos enseña mucho antes del siglo IV precisamente en la época apostólica, que el matrimonio es un sacramento grande: *hoc sacramentum magnum est; hoc stat in Christo*.

Por consiguiente, no puedo tomar esta observación en cuenta, y la noto simplemente de paso, para demostrar hasta dónde llega en todo la incongruencia del proyecto y de los motivos con que respectivamente pretenden fundarse el Poder Ejecutivo y la Comisión.

Pero, señor presidente, la Comisión y el Poder Ejecutivo, pretenden que el matrimonio es nada más que un contrato, y de aquí deducen que pueden legislar el contrato del matrimonio, o las capitulaciones matrimoniales que pueden hacer los esposos, lo cual nadie les negaría, ni les discute; sino el matrimonio en sí mismo, substituyendo a las leyes constitutivas del acto moral que le da existencia, leyes de su invención, leyes de su modalidad política; haciendo depender de estas leyes el vínculo moral que lo establece.

En seguida, el señor miembro informante, —

quiero ser preciso al referirme a su exposición, y cito por eso sus palabras textuales, — nos decía lo siguiente:

«Por medio de este «contrato», señor presidente, el hombre ha formado familia, grupos de familias, que a su vez han formado pueblos y ciudades, quines a su vez han constituido gobiernos para el mejoramiento de sus instituciones, para proveer a su felicidad, orden, bienestar y progreso.

«Todos los gobiernos que se han sucedido desde la época paradisiaca hasta nuestros días, así lo han considerado, y como tal han legislado sobre él, haciendo uso de un derecho soberano que tienen; y han reglamentado siempre «las relaciones de derecho» que nacen «de ese contrato», de esa «unión de dos personas de distinto sexo» que se llama matrimonio.

«El matrimonio, como he dicho antes, es de derecho natural; «es un contrato, porque de él nacen relaciones de derecho en la familia», que la autoridad civil, el Estado, tiene el derecho de legislar.»

Iguales conceptos jurídicos se contienen, señor presidente, en el mensaje del Poder Ejecutivo.

Por modestamente que me juzgue, como abogado, señor presidente, yo no puedo asentir a estas afirmaciones de la Comisión y del Poder Ejecutivo. Las relaciones de familia, señor presidente nacen de la ley, no del contrato.

Cinco son las fuentes de las obligaciones que en el derecho se conocen: el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito, y la ley, o si queremos pueden reducirse a tres, — el contrato, el delito y la ley; comprendiendo en los dos primeros el cuasi contrato y el cuasi delito: *aut ex delicto vel quasi, aut ex contractu vel quasi, aut ex lege*.

Pues bien, señor presidente, de ninguna de las dos primeras proceden las relaciones de familia, las cuales nacen de la ley: yo no soy padre por contrato con mi hijo, ni éste es mi hijo por contrato conmigo; no es por contrato con él que yo pueda reclamar los derechos de la patria potestad que me da la naturaleza y que nacen de mi calidad de padre, ni es por contrato que él puede reclamar de mí el cumplimiento de los deberes que la naturaleza me impone y que son anexos a mi calidad de padre. Estas calidades y estos deberes nacen de la naturaleza, de la ley, y el Poder Ejecutivo y la Comisión las hacen depender «del contrato».

En el matrimonio, señor presidente, hay di-

versos elementos a considerar: el matrimonio en sí mismo, y las relaciones que el matrimonio, una vez celebrado, puede desarrollar en el orden civil de las naciones. Esto cae bajo el imperio de la ley civil, pero no desde el punto de vista de los contratos, sino desde el punto de vista de la «ley natural» que le da existencia.

La ley civil puede, así, desenvolver en el orden civil los derechos y deberes que nacen del matrimonio, sin contrariar los principios de la naturaleza humana, y los deberes que ella impone en la familia; y al reconocer y declarar todo esto, el legislador en conformidad a la naturaleza moral del hombre, debe tomar en cuenta el medio social en que legisla, para ampliar, extender, modificar o limitar en él estas relaciones de familia, respecto a los derechos civiles de los padres o de los hijos, la mayor o menor edad de éstos, alcance de la patria potestad, derechos civiles de los esposos entre sí, comunidad de sus bienes; en fin, todo aquello que pueda tener un «interés social» o un «interés» que como decía al principio de mi discurso, es un «interés pecuniario», o interés apreciable «en dinero», que le distingue de aquel «otro».

Todo esto cae bajo la acción de las leyes civiles para determinar en armonía con la ley natural y el estado social de las naciones, lo relativo al cuidado y educación de los hijos, deberes sociales y civiles de éstos con sus padres y de los esposos entre sí; pero gran parte de estas mismas relaciones se subtrae a la acción y al influjo de las leyes civiles, y quedan bajo el solo dominio de la ley moral. ¿Cómo podría la ley civil dar acción para el cumplimiento de aquellos deberes que la naturaleza y la moral imponen, y que consisten en manifestaciones de afecto y mutua estimación?

«Por medio de este contrato», dice la Comisión, el hombre ha formado familia, grupos de familias que a su vez han formado pueblos», etcétera. Luego «el contrato» es la base de las sociedades humanas, cuyo vínculo es el jurídico de la convención, o del contrato social, es decir, el vínculo de la «fuerza»; su moral, la del interés social, la del cálculo, de la utilidad común, etcétera; de suerte que cuando esta utilidad desaparece, concluye la moral del matrimonio, y el divorcio queda legitimado a pesar de su naturaleza indisoluble, y de ser la unión indisoluble del hombre y de la mujer, consorcio de toda la vida, comunicación del «derecho divino y humano», como lo definían los romanos.

¿Cuál es la «comunicación del derecho divino» que por esta ley viene a establecerse cuando comienza por suprimir «todo derecho divino», y el señor miembro informante de la Comisión nos dice que nada de esto hay en el proyecto porque en la Constitución no se habla de Dios, ni de leyes canónicas, ni de leyes divinas?

Y esto, señor presidente, no se crea que son ideas puramente personales, y propias o exclusivas, diré así, del señor miembro informante de la Comisión o de la mayoría misma de ella; estas ideas son, *mutatis mutandis*, las ideas del Poder Ejecutivo, de las cuales nace, naturalmente, este proyecto, pues, el Poder Ejecutivo tiene a este respecto y expresa en su mensaje el mismo escepticismo, el mismo materialismo, y funda a este respecto la misma incredulidad de la escuela positivista o materialista.

Permítaseme recordar a este propósito uno de los párrafos del mensaje del Poder Ejecutivo que dice así: «El matrimonio es «de todos los contratos» el que tiene más nobles y altos fines...

Todos los fines morales del matrimonio, los más nobles ciertamente, y que por la naturaleza misma no pueden ser así objeto de convención o contrato, a menos de crear y constituir una moral convencional, lo cual demuestra que tan nobles y altos fines no pueden revestir un carácter civil o «pecuniario», el carácter de un «interés apreciable en dinero», que, repito nuevamente, es el carácter distintivo de los objetos del contrato civil.

Pero todo el espiritualismo de nuestra civilización, tan noble y alto como es, nada vale para el Poder Ejecutivo que, como la Comisión, comienza por eliminar toda idea de Dios en el acto constitutivo de la familia y de la sociedad, cuando dice: «El matrimonio es «de todos los contratos» el que tiene «más nobles y altos fines»: «forma la familia» que es la base de la sociedad: crea derechos y obligaciones entre los cónyuges, y entre éstos y sus hijos que deben criarse «para la vida del ciudadano» al calor de un hogar legal.»

El «contrato» es así, quien crea todas estas relaciones de familia, que, repito, no nacen sino de la ley.

El Poder Ejecutivo no señala a todas estas relaciones otro carácter ni otro fin, que las limitadas y estrechas de la tierra en la vida moral del hombre, criado sólo para la vida del ciudadano, sin destino inmortal, más allá de la vida presente, quedando así excluido el dogma de la espiritualidad y de la inmortalidad del alma, de la existencia de Dios, de la liber-

tad humana: todo el dogma social del cristianismo y de la escuela espiritualista.

El informe de la Comisión desarrolla las mismas teorías que el Poder Ejecutivo y dice:

«Por otra parte, la justicia se administra en nombre de la soberanía del pueblo; allí, en la Iglesia, en los tribunales eclesiásticos no hay soberanía, no es conocida, se le niega, se le rechaza, más aún, lo que es un colmo, se declara a la faz del Senado que es súbdita de la Iglesia, que está sujeta a sus leyes.

«Como argentino y como representante que soy de la soberanía nacional, yo rechazo esa afirmación; la rechazo con toda la energía de que soy capaz.

«Nuestra soberanía no es súbdita de nadie en la tierra. Ella tiene su origen en el pueblo, y el pueblo tiene este Sinaí para expresar su voluntad soberana que sale en forma de leyes para cumplirse dentro de su territorio con toda la eficacia que ellas revisten.»

De manera que la soberanía de que se trata, es la soberanía moral de la iglesia católica, la soberanía moral del Pontífice Romano, que ningún poder político ejerce; es la soberanía de Dios en los actos humanos.

Estamos siempre sobre el mismo terreno del socialismo y de la revolución, sobre el mismo terreno de las escuelas materialistas, positivistas, socialistas, etcétera.

No encuentro en este momento un párrafo de la exposición del señor miembros informante de la Comisión, que deseaba señalar a la consideración del Honorable Senado y para no hacer perder tiempo a la Cámara, ruego al señor miembro informante tenga la amabilidad de precisar el concepto con que nos decía que al aconsejar la sanción de este proyecto, la Comisión sólo había tenido en cuenta la Constitución que nada habla de Dios, ni de leyes de la Iglesia, ni de leyes divinas.

**Sr. Rodríguez (C. J.).** — De Dios, no. He hablado de las leyes de la Iglesia, de las leyes cristianas, de las leyes romanas.

**Sr. Pizarro.** — ¿Cómo decía?

**Sr. Rodríguez (C. J.).** — Dije que la Comisión no había tenido otro punto de inspiración que las leyes civiles del Estado.

**Sr. Pizarro.** — ¿Y con qué espíritu ha estudiado la Comisión esas leyes civiles y la Constitución?

Indudablemente con el mismo espíritu con que las ha estudiado el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nos dice que ha estudiado la Constitución con espíritu liberal; pero no en el sentido en que yo he explicado la libertad.

Porque la libertad, señor presidente, preciso

será que nos entendamos una vez por todas, la libertad que en concepto del Poder Ejecutivo tiene el sentido de un derecho, tiene en el mío el de una obligación. ¿La libertad es un derecho? No señor presidente: la libertad es un deber.

¿Acaso soy yo libre para dejar de cumplir mi deber en este momento oponiéndome a la sanción de este proyecto? ¿Estaría en «mi derecho» para no oponerme a él teniendo la «conciencia» de que debo oponerme? ¿No es entonces mi deber antes que «mi deber» antes que «mi derecho», el oponerme a él?

Y bien, señor presidente, si soy libre en este acto, es precisamente, porque cumplo mi deber, según entiendo que debo cumplirlo.

Si la libertad es un derecho, yo podría renunciar este derecho: los pueblos podrían renunciar a su libertad, y entonces la prostitución sería un derecho.

La libertad, señor presidente, la libertad es un deber; la libertad se funda en el deber moral, y nadie es libre para dejar de hacer lo que entiende que debe hacer, ni para hacer lo que la conciencia le dice que no debe hacer. Si la libertad fuese un derecho, el que lleva el peso amargo de la vida podría renunciar a la vida y estaría en su derecho para descargarse del peso de ella. Todos esos que se llaman derechos imprescriptibles e irrenunciables, no son sino deberes.

Lo mismo sucede en el orden político: el elector no es libre para dejar de elegir o para hacer de su voto un objeto de explotación o lucro personal.

Este falso concepto que se tiene de la libertad, corresponde a la escuela del positivismo, y es el que funda la esclavitud de las naciones en ciertas épocas de su historia.

Cuando yo estudio nuestra actualidad, señor presidente, temo que no estemos distantes del momento en que la historia nos demuestre la desaparición de sus instituciones liberales para fundar un nuevo régimen político que cambie no sólo el espíritu sino el texto mismo de la Constitución.

En la historia del mundo, cuando llegan ciertas épocas como la presente, en que se desconoce el verdadero espíritu del hombre, se deja de considerar la libertad como un deber, y se fundan proyectos como el que está en discusión, las instituciones muertas en su espíritu, concluyen por estarlo también en el texto mismo de ellas.

Entonces se conoce que para nada sirven, y se siente la necesidad de darles una nueva forma de centralización y de fuerza, más en ar-

monía con la depresión moral a que llegan los pueblos por el desarrollo de una filosofía materialista y corruptora.

Estos caminos señala la ley del matrimonio civil, que comienza por relajar el vínculo moral para substituirlo por el vínculo jurídico, y quitando al matrimonio su dignidad lo rebaja al nivel de los contratos en que los esposos, los padres y los hijos no son otra cosa que personas obligadas entre sí a prestaciones de mero carácter civil. La dignidad de la mujer; el respeto y el amor filial, la autoridad paterna, todo toma entonces un nuevo aspecto materialista y torpe; y perdiendo el matrimonio todo su prestigio, y la familia toda su atracción, está cerca la época en que un nuevo crítico reproduzca este concepto de un sátira de Petronio: *in hac urbe nemo liberos tollit*.

La Constitución, señor presidente, no dice que el progreso, el adelanto y la civilización consistan, únicamente, en el desarrollo de los elementos de prosperidad y riqueza material. Ella funda más nobles aspiraciones y más altos destinos en la vida humana, y comenzando por invocar a Dios, en su preámbulo, aspira a fundar una civilización más alta, tomando la sociedad y la patria en sus más nobles aspiraciones, según el espíritu de que están poseídas e informa su historia y complexión social.

El señor miembro informante de la Comisión, decía no haber encontrado nada en la Constitución que al tratar del régimen civil del matrimonio, le indicase que debiera preocuparse de leyes canónicas, ni de leyes divinas. Pero, ¿qué concepto tiene formado de la ley la Comisión de Legislación? ¿Qué es la ley en sí misma sino un don del cielo, *munus divinum* como es la «raza humana» en sí misma, Dios, en una palabra, de quien emana «la razón», el espíritu, el alma humana?

Es por esto que la Constitución declara en su preámbulo, que Dios es la fuente de «toda razón y justicia», y que, por lo mismo, no se puede eliminar de las leyes de la República el principio religioso, el espíritu cristiano, el espíritu de Dios.

Yo quisiera, así, que la Comisión me diera qué sentido constitucional y filosófico tiene para ella la palabra ley. Si para ella esta palabra no significa «espíritu» de Dios, si no significa «razón», necesariamente tiene el sentido material de «fuerza».

Yo quiero leer al Honorable Senado algo de lo que a este respecto dice un notable escritor enciclopedista hablando de la ley.

«En el lenguaje de la filosofía, la palabra ley denota una de las condiciones esenciales del

ser; una de las propiedades que lo constituyen tal, y sin la cual no sería lo que es. En este sentido se habla cuando se dice que es ley de los cuerpos graves ser atraídos hacia el centro de la tierra; que es ley de los líquidos buscar su nivel: que es ley del calórico propender al equilibrio, etcétera. Todas estas leyes son naturales y son ellas las que conservan la armonía del universo, la reproducción de los seres y todos los fenómenos físicos que se presentan a nuestra admiración. Sin la observancia de estas leyes el universo no podría existir un solo instante, la vida y el movimiento se extinguirían, las fuerzas de la naturaleza lucharían entre sí con indómita energía, y todo lo que llamamos «materia», distribuida ahora con tan exquisita simetría y revestida de formas tan diversas, no sería más que una masa confusa de átomos heterogéneos: sería, en una palabra, el «caos».

«Pero, además de ese orden que la Providencia ha querido establecer en la parte visible del universo, hay otro exclusivamente destinado al hombre en cuanto es «ser espiritual» y dotado de «razón»; en cuanto está destinado a propagar su especie y vivir con sus semejantes.

Este orden depende de leyes no menos imperiosas, no menos irresistibles que las del mundo físico. Sin ellas no es posible concebir la existencia del hombre, de la familia ni de la sociedad; sin ellas, la «fuerza» sería la única regla de las acciones humanas; los pasiones se desencadenarían con irresistible vigor; la infancia y la debilidad no encontrarían auxilio, ni apoyo; la palabra «justicia» no tendría significado; no podría concebirse «la idea del derecho», y desprovisto el ser humano de los medios de conservación y defensa con que la naturaleza ha dotado a los otros animales, su especie desaparecería muy en breve de la superficie de la tierra...! Cicerón, en sus admirables libros *De Legibus*, entiende por ley de «la razón» superior impresa por la naturaleza, la cual prescribe lo que «ha de hacerse», y prohíbe lo que «ha de evitarse». «Esta misma razón dice cuando ha recibido su desarrollo y perfección, es «el espíritu del hombre», es la «ley». Y en otro lugar agrega: «La ley no es una invención humana; no se parece en nada a lo que los hombres aprenden. Es una «cosa eterna» que dirige al universo por la sabiduría de sus mandamientos y de sus prohibiciones. Esta primera y última ley es el «espíritu de Dios» mismo cuya soberana razón manda y prohíbe. De esta ley deriva su nobleza, la que se ha dado al género humano.»

Es por eso que la Constitución escribe en ese preámbulo que Dios es fuente de toda «ra-

zón y justicia», principio de toda legislación y de todo derecho.

Es, pues, con arreglo a este primer principio constitucional que ha de desarrollarse nuestra legislación, todo el derecho público y privado, todo el derecho interno y externo de la Nación.

No podemos, señor presidente, fundar con arreglo a la Constitución, un principio anticristiano en nuestras relaciones internacionales. No podemos fundar el principio de la conquista o de la «fuerza», contrario a la civilización cristiana y a la ley de las naciones modernas. Nuestras relaciones exteriores, en la paz como en la guerra misma, tienen que ser morales, civilizadas y cristianas, según el texto y espíritu de la Constitución.

Y esto que se observa respecto de las relaciones exteriores y de los tratados que la Nación haya de concluir con las demás naciones, que son como la Constitución misma, ley suprema de la Nación, hay que observarlo en todos los otros ramos de la legislación y del derecho interno, que obedecen al mismo principio constitucional.

Demostrado que la Constitución es desde su preámbulo espiritualista, ¿podría dejar de serlo en el desarrollo de sus artículos?

Esto no es posible, señor presidente. La Constitución en todos sus artículos desenvuelve el principio fundamental consignado en su preámbulo y que sirve de base a todos ellos.

El artículo 2º comienza, así, por declarar y establecer que la Nación sostiene el culto católico, apostólico romano; y este artículo está inspirado y es un desenvolvimiento del principio espiritualista que la Constitución consagra en su preámbulo.

Este artículo, señor presidente, no puede ser interpretado con el espíritu de una torpe y materialista filosofía, para decir que la Constitución habla sólo «del pan» que nutre los cuerpos, o del dinero que debe darse para la sustentación del clero y mantenimiento del culto católico.

No puede decirse, señor presidente, que este artículo sólo trata de las necesidades materiales del culto. Esto no sería una leal, franca y sincera interpretación de la Constitución. Nadie podrá negar que por medio de este artículo la Constitución ha querido desarrollar la influencia social del catolicismo, e inocular en el pueblo su doctrina canónica, su moral, su dogma, en las relaciones sociales, en las relaciones todas de la vida nacional, lo mismo en la vida pública que en la vida privada de los ciudadanos.

O, habremos de sostener esto, señor presidente, o tendremos que decir que, conceptuando la Constitución que la religión católica apostólica romana, no es sino una preocupación de la ignorancia, una preocupación de espíritus débiles o mediocres, ha querido mantener en el país un espíritu supersticioso, un error grosero, un elemento de atraso y de ignorancia, engañando al pueblo, barbarizando la Nación entera.

En nombre del patriotismo y de la sabiduría de los fundadores de nuestra Carta constitucional, yo rechazo y protesto contra interpretación tan torpe y absurda. Este artículo no puede tener otro sentido que el que le dejo señalado, y lógicamente deriva del primer principio establecido por la Constitución en su preámbulo, al reconocer a Dios como origen de toda razón y de toda justicia.

Es, precisamente, el que le asigna la preciosa representación hecha al Senado por el ilustrísimo señor arzobispo, que en pocas palabras condensa y resuelve la cuestión que se debate, señalando este artículo, entre otros, a la consideración de esta Cámara, como prescripción constitucional que no deja lugar a hesitaciones y a dudas. No han comprendido la exposición del ilustrísimo señor arzobispo los que midiendo su importancia por su extensión, han creído que ella era deficiente y débil.

Ella trata «in terminis» la cuestión cuando se refiere al preámbulo de la Constitución y pasa luego a mencionar diversos artículos de la misma, entre ellos el artículo 2º de que me ocupo.

Esto importa decir que la Constitución es no sólo espiritualista, no sólo cristiana, sino algo más: que es católica en su texto y en su espíritu; y que, por consiguiente, este proyecto es manifiestamente inconstitucional.

Este artículo, señor presidente, no habría podido consignarse ni se habría consignado en la Carta constitucional de Inglaterra. Este artículo no se encontraría en la ley constitucional de ninguna nación disidente en materias religiosas, de la doctrina y dogma católico que constituye la religión del pueblo en la Nación Argentina.

Este artículo no estaría en la Constitución de Rusia o de Turquía; este artículo se pone en la Constitución argentina respondiendo a la fe religiosa de la Nación, respondiendo al sentimiento eminentemente católico de la Nación, respondiendo al dogma social de la Nación.

Este es el espíritu verdadero, leal y honrado del sentimiento religioso del pueblo argentino.

de la Constitución nacional, y es con este espíritu que debe interpretarse este artículo.

Es éste el espíritu con que debe estudiarse la Constitución para saber si la ley de matrimonio civil que excluye toda influencia religiosa en él, es o no conforme a su texto y a su espíritu; a sus altos fines morales y a sus principios fundamentales de carácter político; para saber si es, como dije, una ley contraria al dogma de la libertad humana, al dogma de la razón humana, al dogma de la existencia de Dios y de la soberanía nacional.

No se explicaría...

**Sr. Funes.** — Como el señor senador Pizarro se encuentra algo fatigado, propongo que pasemos a cuarto intermedio.

**Sr. Presidente.** — Invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Así se hace, continuando poco después la sesión.

**Sr. Pizarro.** — Examinaba, señor presidente, las disposiciones constitucionales que dan a la Carta Fundamental de la República, su carácter no sólo religioso y cristiano, sino también católico. He examinado su preámbulo y su artículo 2º; pasaré a otros.

El artículo 59 dice: «Los senadores y diputados prestarán en el acto de su incorporación juramento de desempeñar debidamente su cargo y de obrar en todo conforme a lo que prescribe esta Constitución.»

«De obrar «en todo» conforme a lo que prescribe esta Constitución», es decir, lo mismo cuando se trata de dictar «leyes civiles» que cuando se trata de dictar leyes penales, comerciales; etcétera; lo mismo cuando se trata del derecho interno, que cuando se trata del derecho externo que se desarrolla en convenciones, tratados, concordatos, etcétera; «en todo»: en todo lo que se refiere a la materia legislativa, procederán con arreglo a la Constitución, prestando a este efecto «juramento» que es la invocación de Dios que envuelve una profesión de fe espiritualista y cristiana, en nuestro caso, pues, ese juramento, se presta conforme al principio religioso de nuestra sociabilidad, por Dios y los santos Evangelios en que se contiene el dogma cristiano.

La Constitución norteamericana, señor presidente, pone alternativamente «juramento» o «afirmación». Ellos no creerían entonces en Dios, si se limitasen a «afirmar», negándose a «jurar». No pertenecerían a la escuela espiritualista de la Constitución, y ésta quiere fundar escuela de filosofía y política, y les exige

una fe en Dios, una fe religiosa, a fin de asegurar por este medio el carácter de la legislación nacional, e impedir que ésta sea contraria a la índole social de la Nación.

Y este juramento, señor presidente, no es la invocación de un «Dios desconocido», o de un Dios pagano; es la invocación de Jesucristo, y cuantos en esta Cámara desempeñamos las funciones de legislador, estamos obligados por un juramento solemne a desempeñarlas con espíritu cristiano y en conformidad al espíritu católico de la Constitución.

El artículo 67 inciso 15, dice, a su vez: «Corresponde al Congreso... proveer a la seguridad de las fronteras, mantener el trato pacífico con los indios, y «promover» la conversión de ellos al «catolicismo».

De manera que la Constitución, el Congreso, y su legislación como su política, no sólo debe ser espiritualista y cristiana, sino que debe ser hasta «propagandista»: debe hacer propaganda del catolicismo, y procurar incorporar nuevos elementos a nuestra sociabilidad, atrayendo a ella y «civilizando» por medio del catolicismo las tribus salvajes.

Ninguna constitución que no perteneciera a una nación católica como la nuestra, contendría en sus artículos bases reiteradas, expresas y terminantes disposiciones respecto a la política cristiana y hasta de propaganda que debe hacer el Congreso al incorporar nuevos elementos a su sociabilidad.

Corresponde también al Congreso, por el citado artículo de la Constitución, «aprobar, desechar los tratados concluidos con las demás naciones, los concordatos con la silla apostólica, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Nación».

Pero la misma Constitución declara en su artículo 27 que estos tratados deben estar «en conformidad con los principios del derecho público establecidos en esta Constitución», que son los de la civilización cristiana.

Señor presidente: si el idioma no ha perdido su significación; si tratándose de patronato nacional no hemos de confundir la «potestad patronímica» con la «potestad señorial»; si no hemos de decir que por el patronato nacional el Estado se constituye soberano y dominador de la Iglesia católica, si hemos de entender lo que los poderes dicen, lo que la Constitución claramente expresa en este artículo al hablar del Patronato, como cuando anteriormente habla de sostener el culto católico y de convertir a los indios al catolicismo, debemos necesariamente entender que en todo esto se habla de



protección, amparo y fomento a la religión católica.

Esto importa el patronato honradamente interpretado.

No es «fuerza», no es negación, no es «presión», no es eliminación en las leyes de la influencia social del catolicismo: es todo lo contrario.

Y esto, ¿por qué, señor presidente? Porque la Constitución entiende que los representantes de la Nación en el gobierno democrático representativo que ella establece, no tienen poderes ilimitados; que son simples mandatarios con poderes determinados y restringidos, y deben conformar sus actos a la voluntad soberana de la Nación y a los principios fundamentales que ella establece para su gobierno, desarrollando la política que ella, árbitra de sus destinos, quiere sea desarrollada en sus leyes.

El Congreso debe así, proteger, respetar, promover el catolicismo en sus leyes respetando la Constitución y la soberanía del pueblo en quien únicamente reside el poder soberano de la Nación.

De otro modo, si el Congreso y los poderes instituidos por la Constitución tratan de imponer nuevas creencias, de eliminar las que el pueblo tiene y profesa, asumen la soberanía del pueblo ejercitan poderes que no les están conferidos; ejercitan un poder ilimitado que pesa sobre la conciencia nacional, sobre la opinión nacional, sobre la voluntad nacional; y «se constituyen» así en señores, en dominadores, con poder absoluto e irresponsable ante el país.

Por eso, señor presidente, este proyecto no ha podido presentarse sino después de haberse fundado en esta misma Cámara la teoría altamente inconstitucional y contraria al dogma fundamental de las democracias, de que la opinión pública es un mito que no puede pesar en los actos de los poderes públicos, estableciendo así la irresponsabilidad social en el gobierno de la Nación.

Queda así eliminada toda responsabilidad en los mandatarios y representantes de la soberanía nacional, y éstos constituidos árbitros de los destinos de la patria, con facultad de señalar nuevos rumbos y nuevos derroteros a su civilización, contra los que el pueblo de la Nación se tiene prefijados y establecidos en la Constitución o ley fundamental.

Otro de los artículos de la Constitución da al Congreso facultad de admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religiosas a más de las existentes.

La Constitución no sólo garantiza así la estabilidad de estas órdenes, del catolicismo para la enseñanza y difusión de su doctrina y ser-

vicio de su culto público, sino que autoriza al Congreso para admitir otras nuevas, si fuere necesario.

El espíritu de la Constitución, su texto liberal y expreso, sus artículos repetidos uno a uno, su política, todo es, pues, eminentemente espiritualista, eminentemente cristiano eminentemente católico.

Otro de sus artículos, el 76, dice: «Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere pertenecer a la comunión católica, apostólica y romana».

¿Por qué, señor presidente, nuestra Constitución que declara la libertad de cultos, exige precisamente del presidente y vicepresidente de la Nación que sean católicos?

Porque se presume que los que lo son, y tienen una fe sincera, como debe suponerse en hombres de cierta posición y rango social, que hacen profesión de una fe pública, aceptan entonces el cargo bajo el seguro y garantía de esta misma fe, que se habrá de manifestar en sus actos, al ejercer las delicadas funciones que la Constitución confía y quiere poner bajo esta salvaguardia y seguro, para el cumplimiento de sus altos fines sociales.

La Constitución supone entonces, que el espíritu y civilizador del catolicismo, ha de extender su influencia en todas las ramas de la administración y del gobierno de la Nación, y la moral cristiana ha de informar todos sus actos, respetando la soberanía de Dios y la soberanía del pueblo, la soberanía de la «razón divina» que es la fe del pueblo.

No es, pues, al acaso que todas estas disposiciones vienen consignadas en la Constitución. Hay en ella un plan sistemado de progreso y desenvolvimiento social. Ella ha tomado todas las precauciones, todas las garantías posibles para la realización de este plan, tanto respecto de los miembros del Congreso, como respecto de los miembros del Poder Ejecutivo; y en estos últimos con mayor eficacia como que ejercen una acción más directa y eficaz en el movimiento social.

En cuanto a los miembros de la Legislatura, basta que pertenezcan a cualquiera de las comuniones cristianas en que puede estar dividida la sociedad; pero respecto del presidente y vicepresidente de la República exige más todavía, exige que sean católicos, a menos de no ser constitucionalmente elegibles.

Tan allá ha ido la Constitución que no habiendo creído necesario fijar la fórmula del juramento de los miembros del Congreso, hace materia constitucional la fórmula misma del ju-

ramento del presidente y vicepresidente de la República.

El artículo 80 de la Constitución dice: «Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento en los términos siguientes: «Yo, N. N. juro por Dios nuestro Señor (reconociendo así la soberanía de Dios, la soberanía moral de la Iglesia, la soberanía del espíritu de Dios sobre el espíritu del hombre, la soberanía del espíritu sobre la materia), juro por Dios nuestro Señor, y estos Santos Evangelios «desempeñar con lealtad» y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación; y observar y «hacer observar fielmente» la Constitución.»

No ha podido ser más explícita y exigente la Constitución. No ha podido tomar mayores garantías en pro del catolicismo.

¿Y por qué ha hecho esto la Constitución? ¿Lo ha hecho caprichosa y arbitrariamente?

¿Lo ha hecho porque eran viejos decrépitos los que organizaron la Nación y dictaron aquella Constitución? ¿Porque eran atrasados, retrógrados, ignorantes?

No, señor presidente, no; lo han hecho porque eran «estadistas» y decían como Gladstone: «Es necesario respetar la opinión pública, respetar las costumbres públicas, respetar la fe religiosa de la Nación, respetar las creencias del pueblo, respetar su moral, respetar su dogma.»

Es necesario no tener el sentido práctico del estadista, renegar todas las tradiciones del patriotismo y del saber humano en propios y extraños, para venir a implantar instituciones de este género que echan a rodar la Constitución, las costumbres, la moral, la sociabilidad y civilización argentinas.

El juramento, señor presidente, no concluye todavía. Puesto por testigo a Dios nuestro Señor de la lealtad y sinceridad con que será interpretada y cumplida la Constitución, el presidente y vicepresidente de la Nación se cargan con un anatema y dicen, estableciendo el dogma de la inmortalidad del alma: «Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden»!

Dios me lo demande en el orden moral; la Patria me lo demande en el orden público, en el orden social, y en el juicio de la historia!

Como consecuencia de todo esto el artículo 86 da al presidente de la República los derechos del patronato nacional. Ya hemos dicho lo que esto significa, y así se ve toda la filosofía política de los artículos constitucionales que acabo de estudiar.

Ahora, señor presidente: ¿puede el Congreso en su legislación desarrollar principios estable-

cidos a priori para el desenvolvimiento social, contra el texto y espíritu de la Constitución?

¿Puede establecer una teoría de mejoramiento social contraria a la que ella establece?

Evidentemente, no; a menos de subvertir sus altos fines morales, políticos y sociales, como decía al comenzar mi discurso.

Esto se demuestra por sí mismo; pero si no bastasen la razón y las leyes de la lógica, para dejarlo establecido; si se quiere todavía algo más terminante y expreso, voy al texto mismo de la Constitución.

El Congreso tiene el derecho de legislar; está autorizado por la Constitución para promover la reforma legislativa en todos sus ramos; pero el artículo 31 de la Constitución sólo da el carácter de ley obligatoria a los que sean «una consecuencia» del principio social que ella funda y establece con fuerza de ley constitucional.

«Esta Constitución, «las leyes que en su consecuencia se dictan por el Congreso» y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación», dice el artículo 31.

Sólo estas son leyes «soberanas» en la Nación porque sólo ellas son «leyes constitucionales».

Sólo ellas son la expresión y reflejo de la opinión nacional, del voto nacional de la voluntad nacional, de la soberanía nacional.

Las leyes que no están en estas condiciones, y proceden de una teoría social establecida a priori, en fuerza de un espíritu de «innovación política», de innovación constitucional, en fuerza de un espíritu de «innovación social», ya procedan de las iniciativas del Poder Ejecutivo o de los miembros del Congreso en sus Cámaras, «no son leyes» en el país.

No hay más leyes que las que se dictan en nombre de la soberanía; no hay más leyes que las que se dictan por el soberano de la Nación.

Mantener la autoridad de otras leyes es crear una voluntad prepotente y superior a la soberanía nacional, manifestada en los artículos de la Constitución.

Los poderes públicos de la Nación tienen poderes limitados y no son soberanos en ella. La Constitución no da al Congreso un poder omnímodo, un ilimitado poder de legislar para que pueda libremente y según su voluntad soberana ejercer este poder fuera de los términos mismos que ella determina y establece.

La Constitución no ha querido aventurar, señor presidente, los destinos de la Nación, librando su desenvolvimiento social a las alternativas a que puede estar sujeta la composición del Congreso. Ella ha querido garantizar a la Nación de estas alternativas, y ha querido imprimir un

movimiento uniforme a la sociedad, fijando las bases constitucionales de su desenvolvimiento y declarando que «no serán leyes» en la Nación las que salgan fuera de estas bases.

¿El pueblo tiene un derecho declarado por la Constitución a este respecto?

¿El pueblo de la Nación que no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes puede pretender que se respete su fe religiosa, su culto, sus altares, como otros tantos derechos de la soberanía popular?

Sí, señor presidente; sí puede pretenderlo apoyado en una nueva y expresa declaración de la Constitución.

¿Cuál es ésa? Es la del artículo 33, que dice así: «Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, «no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.»

Está, pues, la Nación, en su perfecto derecho para disputar esta soberanía que el simple mandatario constituyéndose en mandante pretende ejercer de un modo omnímodo, y decir: mis negocios se administran en esta forma, y aunque tengo delegados mis poderes para legislar, tengo también el derecho de hacer respetar mi voluntad, porque no me he constituido siervo, no me he organizado una autocracia, no he constituido un cesarismo.

Luego, señor presidente, tenemos el artículo 28 que refiriéndose a todos los que acabo de leer, dice, que los principios, declaraciones y garantías de la Constitución «no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio.»

Es decir que el derecho del pueblo y de la Nación para contraer válidamente su matrimonio con arreglo a los dictados de su conciencia; que todos los demás derechos y garantías de la Constitución a que acabo de referirme y que nacen del principio constitucional informativo de toda nuestra civilización cristiana, católica, «no pueden ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio».

No pueden, por lo tanto, substituirse otros altares a los del culto cristiano, para la celebración del matrimonio, y mucho menos puede suprimirse todo altar y todo culto para no dejar otro que el culto y el altar de la naturaleza, el altar de la «fuerza», el altar del instinto, olvidando cuanto se relaciona con la razón y el alma inmortal.

No se puede, por lo tanto, desterrar de la Nación esa soberanía moral a que se refiere la Comisión en su informe y a que de hecho se re-

fiere el Poder Ejecutivo en este proyecto y en el mensaje mismo con que lo acompaña.

No se puede, ni se debe, ni hay conveniencia social alguna, que aconseje eliminar la influencia de la Iglesia católica en el matrimonio.

Estas leyes, señor presidente, ya lo he dicho, y parece que lo dejó comprobado en este estudio como lo está en la historia, sólo tienen lugar en épocas de decadencia, en épocas de opresión y de barbarie, en épocas de decadencia moral y política.

Es sólo la Iglesia católica la que puede salvar a la sociedad y al mundo del abismo y terribles consecuencias a que conducen estas leyes.

Con ellas vienen en germen el divorcio y la disolución del matrimonio que traen el desprestigio de éste y ponen en peligro la sociedad entera.

Perdida la santidad del matrimonio, perdida toda influencia moral en la familia, y reducido el vínculo de unión en ella al vínculo de la fuerza jurídica, todas las relaciones de familia se relajan, la autoridad paterna viene al suelo, al amor conyugal se substituye al interés, la dignidad de la mujer se abate, la insubordinación de los hijos es su consecuencia, el cariño filial desaparece, y la familia deja de existir.

Estos efectos están comprobados por las lecciones de la experiencia y de la historia. No son nuevos en el mundo, y ellos han demostrado que llega un momento en que es preciso repetir la frase de la sátira de Petronio: *in hac urbe nemo liberos tollit*; «en esta ciudad nadie cuida de sus hijos».

Sólo la Iglesia católica puede, entonces, devolver al matrimonio su perdido lustre, y reconstituir la familia con su influencia moral. Sólo ella puede mantener esta influencia e impedir que idénticos resultados se produzcan en las naciones.

Yo voy a permitirme leer una página del prefacio con que el eminente jurisculto francés monsieur Troplong encabeza su obra *Contrat du mariage*, que nos demostrará a la vez cómo esta institución no ha conseguido echar raíces ni en el suelo mismo de Francia, penetrando en las costumbres públicas, y que, por lo mismo no llegará jamás a ser una institución social en parte alguna del mundo:

«La historia nos ofrece dos épocas memorables, a contar desde los romanos hasta nosotros, dice monsieur Troplong, en que el descrédito del matrimonio «degradó la sociedad y comprometió su existencia»: la primera fue una época de extrema civilización; la segunda una época de extrema barbarie: en aquélla el

mundo era pagano, Augusto reinaba en Roma, y todos los esfuerzos de la «filosofía» y «de la ley» fueron harto débiles «para restituir al matrimonio su dignidad»; en ésta el mundo era «católico», los papas reinaban en lugar de los emperadores, y el cristianismo, más poderoso que la sabiduría pagana, «salvó el matrimonio, la familia y la sociedad».

Llamo la atención del Senado sobre esta época. «Los abusos del divorcio y los horrores del celibato que señalaron el «fin de la República Romana y el reinado de los primeros emperadores», es una de las extravagancias más curiosas del espíritu humano. El «divorcio» era una «moda» y una «especulación»; el matrimonio un «ensayo pasajero» y un capricho de corta duración. Pero lo que es más singular todavía que esta ligereza, en un pueblo que pasa por ser tan constante, es el favor de que gozó el celibato, el favor de que gozó la vida libre «como consecuencia» del relajamiento del vínculo matrimonial. Parece que cuanto más indisoluble es el matrimonio, tiene cadenas más terroríficas para los espíritus volubles, que forman siempre el mayor número; y que por el contrario cuanto más fácil es romper el vínculo matrimonial, mejor incentivo ofrece a los corazones ligeros, que tiemblan de contraer compromisos de larga duración. Y bien, es un fenómeno contrario el que se manifestó en Roma. Cuanto más fácil fué la disolución del vínculo conyugal, mayor alejamiento inspiró el matrimonio a la multitud apasionada por el celibato; de donde se podría concluir que el matrimonio es una de las cosas que mayormente atraen, en razón de la estrechez (*contrainte*) que ellas imponen.»

Troplong recuerda en este lugar la sátira de Petrone, a que me refería momentos antes, en que se traza el cuadro risible y desolador de esta inmensa aberración de los romanos y continúa después en estos términos: «Bajo la hipóbole del romance, se encuentra en este cuadro el verdadero fondo de la vida privada de los romanos. Las célebres leyes de Augusto contra el celibato son la prueba de ello; mas estas leyes no pudieron restituir al matrimonio su perdido lustre. Ellas tomaban su fuerza de la «política», cuando habría sido monester darles «la de las costumbres», pero el paganismo no era sino harto débil para esta regeneración.»

Nosotros, señor presidente, pretendemos debilitar las costumbres y relajarlas por medio de la ley en lugar de robustecerlas y vigorizarlas.

«En la edad media no fué el celibato quien

hizo la guerra al matrimonio, sino la «pluralidad» de los matrimonios y el «concubinato». El celibato investido de un carácter austero no fué sino una ley difícil impuesta a los eclesiásticos, con miras de mayor perfección; no era éste un estado hostil de que las instituciones de las familias tuvieran por qué alarmarse. Empero los repudios, los divorcios, y el concubinato generalizado en todas las clases sociales, alentado por los escándalos de los reyes y magnates, fueron la plaga de la época, y la causa del trastorno en los matrimonios, de la perturbación del estado civil, y de una espantosa disolución en las costumbres.

«La Iglesia luchó; se armó de los decretos de los concilios y de los rayos de la excomunión. Ella obró por medio de la persuasión y del temor de las penas. El matrimonio quedó victorioso, se elevó a la altura y dignidad en que le ha constituido el cristianismo; y a favor de esta restauración ha continuado siendo un sacramento en el orden espiritual, y un vínculo indisoluble en la ley; siendo este «uno de los más grandes servicios que la Iglesia ha prestado a la civilización moderna».

«Francia recoge hoy sus frutos, y los recoge con reconocimiento y gratitud a los filósofos cristianos, que en buena hora han sembrado en su educación la semilla de la sana doctrina. Es ciertamente un acto de justicia que debe tributarse a Francia, reconociendo en ella el concierto de las convicciones populares con los rigurosos preceptos de la religión y de la ley sobre la cuestión del matrimonio. Francia cree con una «fe profunda en la santidad conyugal», en su utilidad social, en el «carácter» legal y necesariamente «excepcional», que ella inviste respecto de los otros «contratos», y en los deberes recíprocos que impone esta «unión de toda la vida». No es esta una «convicción» supersticiosa y crédula. ¿Dónde están hoy las supersticiones? ¿Dónde los ídolos que adoran por debilidad las conciencias subyugadas? Es la «razón», es la honestidad, es el pudor quienes hablan en favor de matrimonio; y Francia jamás ha sido sorda a estas voces.

«Harto lo ha mostrado en estos últimos tiempos en que ciertas sectas de novadores que hacen entrar la abolición, o si se quiere la transformación del matrimonio, en sus planes de regeneración, han osado tocar este punto tan delicado. Si ellos han llegado algunas veces a hacer vibrar la fibra popular al dirigirse a ciertos espíritus profetizándoles ciertos goces materiales, tales sectas no han inspirado sino repugnancia y aversión cuando han englobado

Septiembre 4 de 1888

CAMARA DE SENADORES

43ª Reunión. 41ª Sesión ordinaria

el matrimonio en las concepciones del nuevo estado social a que aspiran. El buen sentido público se ha mantenido en guardia: las buenas costumbres se han sublevado contra ellas y el ridículo ha hecho lo demás. Se había creído, sin embargo, concluir con la Francia del siglo XIX del mismo modo que los bárbaros venidos del Norte concluyeron con el imperio romano, y como si los destinos de la sociedad hubiesen alcanzado ya su cumplimiento, hubiesen promulgado un derecho nuevo, en que apareciese reconstituída la familia, emancipada la mujer, franqueado el matrimonio, abolida la propiedad—y lo que es más lindo todavía—perfeccionada. No faltaba sino una cosa: «cambiar el hombre moral y físico», y yo creo que algo se dijo de esto. Pero no se destruye una sociedad fundada sobre el derecho, y «un derecho fundado sobre la razón» como se derriba «un viejo imperio degenerado» que sintiéndose morir de consunción deja sus tierras sin cultura, sus ciudades sin comercio y sus pueblos sin porvenir.»

Señor presidente: estas son las lecciones de la historia; estas son las lecciones de la experiencia y de la ciencia humanas recogidas en

todas las naciones y de todos los hombres en las diversas situaciones posibles de la vida social.

Yo sé que a pesar de todo esto el proyecto de ley, por desgracia pasará. Cuando me incorporé a este debate traje la convicción profunda de que sería derrotado.

Señor presidente: yo me asocio una vez más a la derrota de la Constitución; yo me asocio una vez más a la derrota de la patria; yo me asocio a la derrota de sus altares; yo me asocio a la derrota del pueblo argentino; me asocio a la dispersión de sus hogares, a la derrota de sus costumbres públicas, de sus instituciones y de sus tradiciones patrias! (*Aplausos*).

He dicho.

**Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública.** — Pido la palabra.

**Sr. Pérez.** — Si me permite el señor ministro haré una moción previa: propongo que se levante la sesión por ser algo avanzada la hora.

—Apoyada esta moción, se vota y es aprobada.

—Eran las 5 y 30 p. m.